



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/CN.4/2006/NGO/206
7 de marzo de 2006

ESPAÑOL, FRANCÉS E INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
62º período de sesiones
Tema 11 del programa provisional

LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

**Exposición escrita* presentada por el Despacho de Asistencia Jurídica a las
Organizaciones Populares (GAJOP), organización no gubernamental reconocida como
entidad consultiva especial**

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye
con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[16 de febrero de 2006]

*Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en los idiomas tal como ha sido
recibida de la organización no gubernamental.

El no respeto por el Gobierno brasileño de las recomendaciones de los órganos de la Comisión de Derechos Humanos

El GAJOP, por intermedio de su Programa de Derechos Humanos Internacionales, desarrollado en cooperación con el Movimiento Nacional de los Derechos Humanos – Región Noreste, presenta su preocupación con la falta de receptividad del Gobierno brasileño ante las recomendaciones que se le han hecho durante los últimos años por los diferentes Comités y Relatores Especiales de la Comisión de Derechos Humanos

Desde la redemocratización del país hace 20 años, los sucesivos gobiernos han seguido una línea diplomática favorable a la promoción y a la defensa universal de los derechos humanos, lo que fue acompañado de la ratificación progresiva de la mayor parte de los principales instrumentos internacionales de protección. En el 2001, Brasil presentó una invitación abierta y permanente a todos los mecanismos de las Naciones Unidas para que puedan visitar el país. Desde 2000, Brasil ha recibido en total la visita de ocho Relatores Especiales, quienes, en sus respectivas áreas de competencia, han presentado unas series de recomendaciones a las autoridades. Por otro lado, el Gobierno actual se pone progresivamente al día en lo que concierne a la presentación de los informes periódicos a los órganos convencionales. Asimismo, los últimos informes elaborados para el CDESCR y para el CERD fueron entregados en el 2003; al CHR y al CRC en el 2004; y al CEDAW en el 2005.

Por lo tanto, el Estado brasileño se encuentra todavía lejos de estar en total acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Presentamos aquí una serie de elementos preocupantes que demuestran que Brasil ha respetado sólo parcialmente las recomendaciones de los órganos de la ONU que le fueron presentadas.

1. La persistencia de altos índices de violencia policial

Varios informes elaborados por el GAJOP durante el año 2005 y entregados a los Relatores Especiales, como también al Comité contra la Tortura, indican que en Brasil, los miembros de las fuerzas policiales continúan ejecutando y torturando en gran escala. Estos actos son cometidos, tanto en servicio (constituyen, luego, abuso de función); fuera de él (en el marco de actividades policiales paralelas, sin embargo prohibidas por la ley), e incluso criminales (grupos de la muerte, tráfico de estupefacientes y/o de armas). Muchas de estas violaciones son cometidas en el interior de los centros de detención, siendo la situación actual de las prisiones brasileñas muy preocupante.

Por lo tanto, ante la ausencia de base de datos confiable y exhaustiva sobre la práctica de dichos crímenes, así como de sus procesos judiciales, es imposible mensurar la real amplitud del fenómeno. Eso no sólo viola las recomendaciones de la ONU, sino que hacen igualmente imposible la elaboración de cualquier política pública eficaz e integrada de lucha contra este fenómeno.

Por otra parte, las corporaciones policiales son reticentes a integrar la dimensión de los derechos humanos en su funcionamiento interno, que permanece aún muy dudosos. Por

ejemplo, la práctica de suspender temporalmente a los miembros de las fuerzas policiales sospechosos o acusados de crímenes contra los derechos humanos no es automática. Tampoco existe disposición, de naturaleza legislativa o reglamentaria, que regule esta situación al nivel nacional.

2. La impunidad continúa prevaleciendo

Todavía más grave, la mayoría de los crímenes de ejecuciones sumarias y de tortura no son punidos. Cuando las investigaciones son abiertas, administrativas o policiales, raramente consiguen identificar, o acusar, a los autores de los crímenes. Las causas de este mal funcionamiento son de varios ordenes: las policías mantienen una fuerte tradición corporativista que tiende a proteger y preservar a sus miembros; los órganos solicitados a colaborar con la investigación (institutos medico-legales; *ouvidorias*, -un tipo de mediador de policía; y *corregedorias*, -organismos internos de control de las policías) son demasiado dependientes de los gobiernos locales y carecen de los medios necesarios; los testigos de los crímenes son frecuentemente amenazados y muchas veces abandonados a su propia suerte; en fin, los pocos medios al servicio de los defensores públicos (*defensoria pública*) no les permiten cumplir su misión constitucional de asistencia judicial gratuita; entre otros factores.

La interacción de estos elementos complica la obtención de pruebas contra los autores de los crímenes, perjudica el buen funcionamiento de los procedimientos judiciales, y compromete sus posibles condenas. Estos obstáculos se agravan cuando las familias de las víctimas son de origen pobre y no pueden beneficiarse del apoyo de un abogado o de una organización no gubernamental. La incapacidad del sistema de justicia brasileño para responder a las expectativas de la población refuerza la impunidad de los responsables de las violaciones y les estimula a repetir estos actos, y aumenta la vulnerabilidad de las víctimas potenciales. La ley sobre la Tortura, adoptada en 1997, es poco utilizada por los actores del sistema judicial.

A pesar de los avances de la Reforma del Poder Judicial, adoptada en diciembre de 2004, y sobretudo la federalización de los crímenes contra los derechos humanos, es también extremadamente urgente reforzar las atribuciones del Ministerio Público (Parquet), especialmente en el reconocimiento explícito, por vía constitucional o legislativa, de los poderes para dirigir sus propias investigaciones en materia criminal. Las iniciativas del Gobierno federal, como el SUSP (Sistema Unificado de Seguridad Pública), se muestran muy dispersadas y no son acompañadas de las necesarias medidas de seguimiento.

3. La victimización, discriminación y criminalización de ciertos grupos sociales vulnerables

Durante su visita a Brasil en el pasado octubre, el Relator Especial sobre Racismo, Señor Doudou Diène, pudo constatar que las violaciones se concentran actualmente en casi los mismos sectores de la población. Por ejemplo, la violencia policial tiene por blanco particularmente a los jóvenes, pobres, y personas de color. La exposición al peligro aumenta de forma alarmante cuando dichas personas son detenidas, y se encuentran en las comisarías de policía o en las prisiones. En la zona rural, los pueblos indígenas son especialmente

discriminados. Las mujeres igualmente son muy expuestas a las violaciones. En fin, el riesgo aumenta considerablemente para aquellos y aquellas que, más allá de la pertenencia a los grupos sociales descritos, actúan en la defensa de los derechos de su grupo.

En este contexto, los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales (por ejemplo los derechos de los indígenas y de las comunidades tradicionales, de los sin tierra o de los sin techo) están particularmente expuestas a intimidaciones, a las amenazas, a la condenación pública, incluso a persecuciones y atentados a sus vidas e integridades físicas.

Por otra parte, como pudo observar Señor Despouy en el informe de su misión a Brasil en octubre de 2004, una gran parte de la población brasileña no tiene ningún acceso al sistema de justicia. Las personas originadas de estos sectores más vulnerables de la población son por lo tanto doblemente victimizadas, ya que ellos no tienen la oportunidad de obtener reparación por las violaciones de que son víctimas debido a su exclusión social.

4. La falta de modelos de protección ofrecidos a las personas amenazadas

A pesar de las recomendaciones de los Relatores Especiales sobre la Tortura y las Ejecuciones Sumarias, y del CAT, el Gobierno no ha respondido a las expectativas de la sociedad civil en lo que concierne a la protección de los testigos, víctimas de violencias, y a los defensores de los derechos humanos. En el primer caso, además de las restricciones presupuestarias impuestas al Programa de protección de los testigos amenazados (PROVITA) desde el 2003, la necesaria colaboración de los órganos públicos competentes, sobre todo las Policías y el Poder Judicial, es poco eficiente, tanto a nivel federal como en los estados federados.

Por otra parte, el modelo propuesto por el Programa Nacional de Protección de los Defensores de los derechos humanos amenazados no ha convencido a sus destinatarios. Esto debido al método empleado durante su elaboración y la inconstancia por parte de la Secretaría de los Derechos Humanos, como por la ausencia prolongada de fundamentos jurídicos, políticos y presupuestarios sólidos. El modelo presentado no nos parece capaz de asegurar la protección efectiva de los defensores amenazados ni de garantizar que sigan sus actividades.

Los derechos humanos están lejos de constituir una prioridad para el Gobierno actual, poco decidido a combatir las fuentes de los problemas y a implantar políticas públicas capaces de garantizar y ampliar el acceso de la población a los derechos. Esta postura tiene por efecto aumentar la exposición de los grupos sociales más vulnerables y permitir la práctica de violaciones adicionales contra ellos.

Por lo tanto, pedimos a la Comisión de Derechos Humanos que presente las siguientes recomendaciones al Gobierno brasileño:

- Que todos los medios necesarios sean empleados para hacer respetar las recomendaciones presentadas por los órganos competentes de las Naciones Unidas;

- Que el país ratifique el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, así como los dos Protocolos Facultativos al Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, y acepte la competencia del Comité contra la Tortura (artículo 22 de la Convención), habilitándolo a recibir quejas provenientes de nacionales brasileños contra su Estado;
- Que se recupere el Programa Nacional de los Derechos Humanos y se adopte un plan de acción para conseguir progresivamente los objetivos que están definidos en éste.

Igualmente, insistimos al Alto Comisionado para los derechos humanos sobre la necesidad de un seguimiento más preciso del respeto por Brasil de las recomendaciones de los Relatores Especiales, seguimiento muy vinculado con las ONGs locales, si es necesario con una visita al país y se instale una oficina del Alto Comisionado.

- - - - -